



Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/HRC/4/75
17 de enero de 2007

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
Cuarto período de sesiones
Tema 2 del programa provisional

**APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 60/251 DE LA ASAMBLEA
GENERAL, DE 15 DE MARZO DE 2006, TITULADA
"CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS"**

**Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos sobre los progresos alcanzados en la
aplicación de las recomendaciones contenidas en el estudio
sobre los derechos humanos y la discapacidad**

Resumen

En el presente informe se exponen los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones que figuran en el estudio sobre los derechos humanos y la discapacidad y en la consecución de los objetivos consignados en el programa de trabajo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en relación con los derechos humanos de las personas con discapacidad. Se enumeran brevemente las actividades realizadas por la Oficina en 2006 en esta esfera. El principal logro de 2006 fue la adopción en diciembre, por la Asamblea General, de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, octavo instrumento básico internacional de derechos humanos. Por consiguiente, en el informe se indican algunos de los principales elementos de esta Convención. Se recomienda al Consejo de Derechos Humanos que siga examinando la cuestión de los derechos humanos y la discapacidad y se sugiere que probablemente el Consejo desee examinar la posibilidad de pedir al Alto Comisionado que le presente anualmente informes temáticos analíticos sobre los derechos humanos y la discapacidad.

ÍNDICE

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
INTRODUCCIÓN	1 - 4	3
I. ACTIVIDADES DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y DISCAPACIDAD	5 - 17	4
II. LA CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU PROTOCOLO FACULTATIVO	18 - 54	6
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	55	17

INTRODUCCIÓN

1. En su resolución 2005/65, la Comisión de Derechos Humanos pidió a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) que informase a la Comisión en su 62º período de sesiones sobre los avances realizados en la aplicación de las recomendaciones que figuran en el estudio sobre los derechos humanos y la discapacidad y sobre la consecución de los objetivos consignados en el programa de trabajo de la Oficina del Alto Comisionado en relación con los derechos humanos de las personas con discapacidad. En su decisión 2/102, el Consejo de Derechos Humanos pidió al Secretario General de las Naciones Unidas y a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que siguiesen llevando a cabo sus actividades, de conformidad con todas las anteriores decisiones aprobadas por la Comisión de Derechos Humanos, y que actualizaran los informes y estudios pertinentes. El presente informe se presenta en respuesta a esa petición.

2. El estudio sobre "Derechos humanos y discapacidad: uso actual y posibilidades futuras de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la discapacidad" realizado en 2002 por el ACNUDH se centra en la labor realizada por los órganos de los (entonces) seis tratados básicos de derechos humanos de las Naciones Unidas para promover el disfrute igual y efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad. El estudio llegó a la conclusión de que, a pesar de sus considerables posibilidades, los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas no se habían utilizado plenamente en el contexto de la discapacidad. Para fomentar el uso de los tratados y mecanismos de derechos humanos en vigor, en el estudio se hace toda una serie de recomendaciones a los Estados Partes, los órganos de los tratados, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil¹.

3. En el contexto de sus recomendaciones, el estudio examinaba la posibilidad de redactar una nueva convención sobre los derechos humanos y la discapacidad. Concluía señalando que la convención "marcaría un tremendo paso adelante y no debería menoscabar sino reforzar las protecciones que ofrecen los seis tratados de derechos humanos existentes". En 2001, la Asamblea General decidió establecer un comité especial para que examinase propuestas relativas a una convención internacional amplia e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, que celebró ocho períodos de sesiones y presentó un proyecto de texto a la Asamblea General para que adoptara las medidas oportunas. El 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General aprobó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad ("La Convención") y su Protocolo Facultativo, que figuran en la resolución 61/106 (véase A/61/611, anexo).

4. Dada la importancia de este acontecimiento, incluso en relación con la aplicación de las recomendaciones del estudio, el presente informe es un intento de informar al Consejo de Derechos Humanos de la nueva Convención. Por tanto, se divide en tres secciones. En la primera se actualizan las actividades del ACNUDH en 2006 en relación con los derechos

¹ G. Quinn and T. Degener, "Human rights and disability: the current use and future potential of United Nations human rights instruments in the context of disability", HR/PUB/02/1, United Nations, New York and Geneva, 2002.

humanos y las discapacidades. En la segunda se esbozan en detalle el objetivo, el contenido, las obligaciones y los mecanismos de vigilancia de la nueva Convención. En la tercera se sacan algunas conclusiones y se recomiendan algunas medidas que el Consejo podría adoptar.

I. ACTIVIDADES DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y DISCAPACIDAD

5. A lo largo de 2006, el ACNUDH prosiguió e incrementó su labor con respecto a los derechos humanos y la discapacidad. En cumplimiento de los cinco puntos consignados en el Plan de Acción del Alto Comisionado, se ha tratado de promover: una mayor sinergia entre el ACNUDH y los diversos órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas; un liderazgo acrecentado del Alto Comisionado; un mayor compromiso de los países; una colaboración más estrecha con la sociedad civil y los organismos de las Naciones Unidas, y el fortalecimiento de la gestión y planificación del ACNUDH.

Una mayor sinergia entre la Oficina del Alto Comisionado y los diversos órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas

6. Gran parte de la labor de la Oficina durante el período de que se informa se centró en ayudar al Comité Especial de la Asamblea General que redactó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo. Con ese fin, la Oficina participó en los periodos de sesiones séptimo y octavo del Comité Especial del 16 de enero al 3 de febrero y del 14 al 25 de agosto de 2006, así como el 5 de diciembre de 2006. En el séptimo período de sesiones, la Oficina organizó una sesión de información y un grupo de trabajo para la hora del almuerzo sobre la reforma de los órganos de tratado y presentó un documento de antecedentes sobre la vigilancia internacional. En septiembre y octubre de 2006, la Oficina participó en el grupo de redacción establecido por el Comité Especial para garantizar la correspondencia de las versiones de la nueva Convención en seis idiomas desde el punto de vista técnico. La Oficina también participó en el proceso de aprobación tanto al reanudarse el octavo período de sesiones del Comité Especial el 5 de diciembre, como en la aprobación final por la Asamblea General en su 61º período de sesiones el 13 de diciembre de 2006.

7. La Oficina ha empezado a trabajar con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos para promover los derechos de las personas con discapacidad en el contexto de sus mandatos. Los días 23 y 24 de noviembre, la Oficina organizó un seminario de expertos sobre "El derecho a la educación de las personas discapacitadas" para ayudar al Relator Especial sobre el derecho a la educación en la preparación del informe temático que debe presentar al Consejo en su cuarto período de sesiones (A/HRC/4/29). Se planea realizar actividades similares para 2007.

Un liderazgo acrecentado del Alto Comisionado

8. En el Plan de Acción se destacaba el liderazgo acrecentado del Alto Comisionado mediante, entre otras cosas, una mayor interacción con los órganos pertinentes de las Naciones Unidas. El 27 de enero y el 5 de diciembre de 2006, la Alta Comisionada dirigió la palabra al comité especial. En su declaración de enero, ella alentaba la labor de éste y reconocía que se

necesitarían recursos para la aplicación de la Convención, al tiempo que subrayaba que la limitación de los recursos no debía ocultar la necesidad de luchar contra una discriminación de profundo arraigo. En su declaración de diciembre, la Alta Comisionada celebró la aprobación de la Convención y destacó el modo en que el proceso de negociación ya había servido de catalizador del cambio dentro de las Naciones Unidas, en particular dadas la gran participación de las organizaciones de la sociedad civil y de las instituciones nacionales de derechos humanos en las negociaciones y la intensificación de los esfuerzos para garantizar el acceso físico y tecnológico a las oficinas de las Naciones Unidas.

9. Durante el segundo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada y el Presidente del Consejo, Sr. Luis Alfonso de Alba (México), presidieron una sesión de información sobre la Convención a la hora del almuerzo para los representantes de los Estados y los observadores en el Consejo. La Alta Comisionada destacó determinadas disposiciones de la Convención, como la prohibición de la tortura y el derecho a la educación, y su importancia para las personas con discapacidad.

Un mayor compromiso de los países

10. La Oficina también participó en reuniones nacionales destinadas a divulgar información sobre la Convención. Los días 30 y 31 de octubre, la Oficina participó en un seminario internacional sobre la Convención organizado en México por la Secretaría de Relaciones Exteriores. El 20 de noviembre, un representante de la Oficina en Uganda asistió a una reunión organizada por el Gobierno de ese país. El 30 de noviembre, la Oficina participó en una reunión organizada por el Departamento de Información Pública en Moscú. El 1º de diciembre, participó en una conferencia organizada por Disabled Persons South Africa en Durban (Sudáfrica), en que la Oficina presentó una ponencia sobre la Convención. El 20 de diciembre, la Oficina participó en una conferencia sobre la Convención en Madrid, organizada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. En términos de cooperación técnica, la Dependencia de Derechos Humanos de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Afganistán (UNAMA) participa, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la financiación de un proyecto pertinente a un programa de radio para promover una mayor conciencia y comprensión de la situación de los discapacitados.

11. En 2006, la Oficina, junto con la Unión Interparlamentaria y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES), aceptó participar en la publicación de un Manual para Parlamentarios sobre la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. El manual estará listo en el segundo semestre de 2007 con el objeto de contribuir a que los parlamentarios y otros actores nacionales entiendan mejor la Convención.

Una colaboración más estrecha con la sociedad civil y los organismos de las Naciones Unidas

12. La Oficina también participó en reuniones entre organismos acerca de la Convención. En junio de 2006, convocó a una reunión de las organizaciones intergubernamentales con sede en Ginebra y las organizaciones de la sociedad civil interesadas en los derechos humanos y la discapacidad con miras a informar del proceso de negociación a las entidades asociadas pertinentes. La Oficina participó en una reunión entre organismos, organizada los días 10 y 11 de agosto en Nueva York por el DAES, para coordinar la labor de éstos en relación

con la Convención. El 30 de noviembre, la Oficina también participó en el Grupo Interinstitucional de Coordinación de Actividades Relativas a las Minas en Ginebra a fin de divulgar información sobre la Convención, por lo que pertenece a la asistencia a las víctimas de las minas terrestres.

13. La Oficina siguió prestando asistencia a las instituciones nacionales de derechos humanos para que participasen en el proceso de negociación de la Convención. Patrocinó la participación del representante del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales en los períodos de sesiones del Comité Especial en enero y agosto. En abril de 2006, la Oficina también organizó en Ginebra una sesión de información sobre el proceso de negociación para el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales.

14. A lo largo de 2006, la Oficina participó en diversas reuniones de grupos de expertos relativas a la negociación y aprobación de la Convención. En marzo, participó en una reunión consultiva organizada por el DAES para los Estados de Europa oriental que no pertenecen a la Unión Europea. A esa reunión asistieron tanto los Estados miembros como organizaciones de discapacitados con el objetivo de contribuir a la labor del Comité Especial.

15. Los días 20 y 21 de noviembre, la Oficina participó en una conferencia de dos días de duración organizada por CBM (International) and light for the world (Austria), que formaba parte del proyecto "Breaking the cycle of poverty and disability in Development Cooperation" -Disability Mainstreaming in Development Cooperation del International Disability and Development Consortium (IDDC), con el apoyo de la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea, en colaboración con diversas organizaciones no gubernamentales (ONG). El objetivo de esta primera reunión europea era formular una estrategia de promoción de la Convención y su función en el fomento de políticas de desarrollo que abarquen la discapacidad.

El fortalecimiento de la gestión y planificación del ACNUDH

16. En abril de 2006, la Oficina cubrió el puesto de asesor sobre los derechos humanos y la discapacidad, con lo que se garantiza una atención a tiempo completo para el mandato a un nivel apropiado.

17. En consonancia con el tema del Día Internacional de los Discapacitados 2006 (el 3 de diciembre), que era la "accesibilidad por Internet", la Oficina completó la primera fase de la revisión de su página central en Internet, con una página sobre discapacidad. Se está actualizando el resto del sitio.

II. LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU PROTOCOLO FACULTATIVO

18. El 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General aprobó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, que figuran en la resolución 61/106 (véase A/61/611, anexo), convirtiéndola en el octavo tratado básico de derechos humanos. La Convención se abrirá a la firma el 30 de marzo de 2007 en Nueva York.

A continuación se esbozan algunos de los principales artículos y cuestiones que plantea la nueva Convención. El objetivo es servir de introducción a la Convención; sin embargo, debido al espacio limitado no se trata de dar una visión total de cada una de sus disposiciones.

Panorama general

19. La Convención tiene 50 artículos que tratan del propósito, los principios generales, las obligaciones generales, los derechos específicos y las medidas que habrán de adoptar los Estados para garantizar un entorno propicio para el pleno disfrute, sin discriminación, de los derechos de las personas discapacitadas, fomentar la cooperación internacional y establecer la vigilancia internacional y nacional. La Convención no crea ningún derecho nuevo; más bien aclara las obligaciones de los Estados en relación con los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales ya existentes. Para garantizar un entorno propicio a la realización de los derechos de las personas discapacitadas, la Convención incluye artículos sobre la toma de conciencia, la accesibilidad, las situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, el acceso a la justicia, la movilidad personal y la habilitación y rehabilitación, así como la recopilación de datos y las estadísticas. La Convención establece una Conferencia de los Estados Partes que se reunirá periódicamente a fin de considerar todo asunto relativo a la aplicación de la Convención y será convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas en un plazo que no superará los seis meses contados a partir de la entrada en vigor de la Convención. La Convención también establece el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con autoridad para recibir y examinar los informes periódicos que le presenten los Estados Partes en la Convención.

20. Con arreglo a lo dispuesto en el Protocolo Facultativo de la Convención, las personas o los grupos de personas pueden presentar ante el Comité comunicaciones en las que aleguen ser víctimas de una violación de cualquiera de las disposiciones de la Convención. El Protocolo Facultativo también permite al Comité que realice investigaciones en los países si recibe información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas de los derechos de las personas discapacitadas.

21. A menudo se afirma que la Convención constituye un cambio paradigmático de actitud que va de la percepción de los discapacitados como objetos de la caridad, del tratamiento médico y de la protección social a la de sujetos de derechos, capaces de reclamar esos derechos como miembros activos de la sociedad. La Convención logra este cambio paradigmático al afirmar que las personas discapacitadas son titulares de derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales y tienen derecho a protección plena contra la discriminación, y al establecer mecanismos de vigilancia a nivel nacional e internacional para garantizar que las personas discapacitadas pueden hacer valer esos derechos.

Propósito y definiciones

22. El artículo 1 de la Convención dispone su propósito: "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente".

23. La Convención no incluye una definición de la "discapacidad" o de las "personas discapacitadas" como tales. No obstante, algunos elementos del preámbulo y del artículo 1 sirven de orientación para aclarar la aplicación de la Convención. En primer lugar, en el preámbulo se afirma que "la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás". En el artículo 1 se dispone que "las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás".

24. Diversos elementos de estas disposiciones merecen destacarse. En primer lugar, se reconoce que la "discapacidad" es un concepto que evoluciona y que resulta de las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan la participación de las personas discapacitadas en la sociedad. Por tanto, la idea de "discapacidad" no es fija y puede variar, dependiendo del entorno predominante en una sociedad u otra. En segundo lugar, la discapacidad no se considera una enfermedad en sí, sino más bien el resultado de la interacción entre las actitudes negativas o un entorno poco propicio para la condición de algunas personas concretas. Al dismantelar las barreras de la actitud y del entorno, en vez de tratar a las personas discapacitadas como un problema que hay que arreglar, estas personas pueden participar como miembros activos de la sociedad y disfrutar de la totalidad de sus derechos. En tercer lugar, el campo de aplicación de la Convención no se limita a personas concretas, sino que incluye a las personas con discapacidades físicas, mentales, intelectuales y sensoriales a largo plazo. La utilización de la palabra "incluye" asegura que esta disposición no necesariamente restrinja la aplicación de la Convención y los Estados Partes también pueden brindar protección a otros, por ejemplo, las personas discapacitadas a corto plazo o a quienes se considera parte de estos grupos.

Principios

25. En el artículo 3 se exponen los principios generales de la Convención. Pueden agruparse de la manera siguiente: el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual y la independencia de las personas; la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la igualdad entre el hombre y la mujer; la participación y la inclusión; el respeto por la diferencia y la aceptación de la diversidad humana; la accesibilidad, y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

26. Aunque todos los principios generales tienen la misma importancia, en la presente sección se recalca la relevancia de tres de ellos: el principio de no discriminación, el principio de accesibilidad, y el principio de participación e inclusión. En primer lugar, el principio de no discriminación es uno de los principios básicos de la normativa internacional de derechos humanos. La "discriminación por motivos de discapacidad" se define en términos similares, pero no idénticos, a las definiciones de discriminación que se encuentran en otros tratados de derechos humanos², de la manera siguiente: "Por "discriminación por motivos de discapacidad"

² See e.g., International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, article 1; Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, article 1.

se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables" (art. 2).

27. La inclusión de la denegación de ajustes razonables como forma de discriminación es significativa. Los ajustes razonables se definen de la manera siguiente: "Por "ajustes razonables" se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales" (art. 2).

28. Por consiguiente, las personas discapacitadas pueden reclamar al Estado y a través de éste a otros actores como el sector privado, la obligación de adoptar medidas para realizar ajustes a su situación particular, siempre que dichas medidas no impongan una carga demasiado pesada. Por ejemplo, si un empleado tiene un accidente que le produce una discapacidad física, ya sea dentro o fuera del trabajo, que requiere que en adelante utilice una silla de ruedas, el empleador tendrá la responsabilidad de proporcionar, por ejemplo, rampas, pasillos despejados o aseos de fácil acceso con sillas de ruedas, y de realizar otros ajustes y modificaciones para que esa persona pueda seguir desempeñando sus funciones de empleado activo. Si no se realizan los ajustes, el empleado tendrá motivos para presentar una reclamación por discriminación ante un órgano judicial o casijudicial apropiado. No obstante, los ajustes que debe realizar el empleador no son ilimitados; deben ser únicamente "razonables" de manera que, por ejemplo, un ajuste desproporcionadamente caro no sería obligatorio.

29. En segundo lugar, el principio de la accesibilidad es un elemento crucial para el desmantelamiento de las barreras que impiden el disfrute efectivo de los derechos de las personas discapacitadas. La accesibilidad física, tecnológica, informativa, comunicativa, económica y social es importante para la participación plena de toda persona en la sociedad. Para las personas con discapacidad, la accesibilidad es especialmente importante, dadas las numerosas barreras que impiden su pleno acceso. La colocación de rampas, pasillos y puertas suficientemente anchos y despejados, la colocación de los manijas en las puertas, la disponibilidad de información en Braille y en formatos fáciles de leer, la utilización de interpretación/intérpretes de la lengua de señas, la disponibilidad de asistencia y apoyo pueden garantizar el acceso de una persona discapacitada al lugar de trabajo, un lugar de recreo, una cabina electoral, el transporte, un tribunal, etc. Sin accesibilidad, no sólo se restringe el movimiento de las personas discapacitadas, sino también su disfrute de otros derechos. Por consiguiente, la accesibilidad no sólo es un principio general de la Convención, sino también una disposición por sí sola. En el artículo 9 se exige a los Estados Partes que adopten las medidas apropiadas para permitir a las personas con discapacidad "vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida" mediante la adopción de las medidas pertinentes para asegurar el acceso al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

30. En tercer lugar, el principio de participación e inclusión está presente en toda la Convención. Cabe notar que, en el artículo 1 se considera que diversas barreras impiden la

participación plena y efectiva de las personas discapacitadas en la sociedad. La participación en la vida política y pública se reconoce expresamente en un artículo (art. 29) que garantiza "a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás". Esto incluye el derecho a participar directamente o a través de representantes libremente elegidos y la promoción de la constitución de ONG y asociaciones de personas con discapacidad que las representen a nivel internacional, nacional, regional y local y de su incorporación a dichas organizaciones. Asimismo, la Convención reconoce específicamente en otro artículo (art. 30) la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. También se hace referencia expresamente a la participación y la inclusión en relación con el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad (art. 19), un sistema de educación inclusivo como elemento del derecho a la educación (art. 24) y la participación e inclusión en todos los aspectos de la sociedad como objetivo de la habilitación y rehabilitación (art. 26). Además, en la Convención se reconoce la importancia de la participación en los procesos que establece, con la exigencia de que los Estados tengan debidamente en cuenta la participación de expertos con discapacidad en el futuro Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que vigilará la aplicación. La importancia de la participación e inclusión en la Convención se resume en el lema utilizado por las organizaciones de la sociedad civil durante las negociaciones: "Nada sobre nosotros sin nosotros".

Obligaciones generales de los Estados Partes

31. En el artículo 4 de la Convención se exponen las obligaciones generales de los Estados Partes en lo que respecta a los derechos de las personas discapacitadas. Específicamente, los Estados Partes "se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad". Para cumplir esta obligación general, la Convención establece una serie de acciones específicas que deben emprender los Estados Partes. A veces las obligaciones en materia de derechos humanos se clasifican como obligaciones de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos³. A continuación se agrupan las obligaciones identificadas en el artículo 4 en tres categorías generales:

- a) *La obligación de respetar:* Los Estados Partes deben abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la Convención; modificar o derogar leyes, costumbres y prácticas discriminatorias existentes; y celebrar consultas estrechas y colaborar activamente con las personas con discapacidad en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la Convención.
- b) *La obligación de proteger:* Los Estados Partes deben tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad.

³ The Committee on Economic, Social and Cultural Rights now regularly refers to the typology of obligations (respect, protect and fulfil) in relation to economic, social and cultural rights in its recent general comments. The Human Rights Committee has also used the typology, although less systematically: see e.g., Human Rights Committee, general comment N° 31 (2004) on "The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States parties to the Covenant".

- c) *La obligación de cumplir:* Muchas de las obligaciones específicas de los Estados entran dentro de esta categoría. Por ejemplo, los Estados deben adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, de políticas o programas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos de las personas discapacitadas; emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes y servicios pertinentes; proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre tecnologías de apoyo, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo, y promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con discapacidad.

32. En el artículo 4 también se hace referencia específicamente a las obligaciones de los Estados Partes en relación con los derechos económicos, sociales y culturales de las personas discapacitadas. Se reconoce que algunos aspectos de estos derechos pueden realizarse inmediatamente mientras que otros están sujetos a realización progresiva⁴. En otras palabras, mientras algunos aspectos de estos derechos (la prohibición de la discriminación, la prohibición de los actos que infringen derechos, etc.) están sujetos a aplicación inmediata, otros aspectos requieren la dedicación de recursos a lo largo del tiempo. Como ha observado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el reconocimiento del carácter progresivo de algunas obligaciones en relación con los derechos económicos, sociales y culturales refleja las realidades del mundo real y las dificultades que implica para cada país el asegurar la plena efectividad de estos derechos, especialmente a la luz de las limitaciones en materia de recursos. No obstante, el Comité observa también que la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales impone, sin embargo, a los Estados Partes una obligación clara de adoptar medidas deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la consecución de estos derechos dentro de un plazo razonablemente breve tras la entrada en vigor del Pacto para los Estados interesados⁵.

Los derechos dispuestos en la Convención

33. En la Convención se exponen las obligaciones de los Estados Partes en virtud de ella en relación con los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Aunque en la Convención no se reconoce ningún derecho nuevo, sí se define con mayor claridad la aplicación de los derechos existentes a la situación específica de las personas discapacitadas. No es posible abarcar aquí todos los artículos de manera exhaustiva. Los ejemplos siguientes indican de qué modo solamente determinados derechos reconocidos en la Convención tienen aplicación práctica en la vida de las personas discapacitadas.

⁴ Article 4 (2) states: "With regard to economic, social and cultural rights, each State party undertakes to take measures to the maximum of its available resources and, where needed, within the framework of international cooperation, with a view to achieving progressively the full realization of these rights, without prejudice to those obligations contained in the present Convention that are immediately applicable according to international law. "

⁵ Committee on Economic, Social and Cultural Rights, general comment N° 3 (1990) on "The nature of States Party's obligations", paras. 3 and 9.

34. Igual reconocimiento como persona ante la ley: en la Convención se reafirma que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica y que tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás. En su nivel más básico, en la Convención se garantiza que la práctica de no inscribir a los niños discapacitados al nacer es una clara violación de los derechos humanos. Además, el reconocimiento de la capacidad jurídica de los discapacitados admite que pueden adoptar decisiones que afecten sus vidas. En caso necesario, los Estados Partes deben adoptar medidas apropiadas para proporcionar acceso a la asistencia a los discapacitados para que puedan tomar decisiones en su propio nombre. Los Estados deben asegurar que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos.

35. El derecho al voto: la Convención garantiza los derechos políticos de las personas discapacitadas y los Estados Partes deben asegurar el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante la garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar. Por ejemplo, para que una persona ciega disfrute del derecho al voto en igualdad de condiciones con las demás, es posible que esa persona necesite material electoral en Braille y un asistente de confianza que la ayude a rellenar las papeletas antes de depositarlas. Por tanto, la Convención garantiza instalaciones de este tipo o similares para que las personas discapacitadas puedan disfrutar del derecho al voto en igualdad de condiciones con las demás.

36. El derecho a la educación: en la Convención se reconoce el derecho de las personas discapacitadas a la educación. Con este fin, los Estados Partes deben asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Por tanto, los alumnos con discapacidad tienen el derecho a no ser excluidos del sistema general de enseñanza por motivo de su discapacidad y a instalaciones razonables según sus necesidades. Esto no sólo significa que los alumnos tienen derecho a asistir a las escuelas del sistema general y a no ser relegados a escuelas separadas, sino también que en el sistema general de enseñanza deben tenerse en cuenta las necesidades especiales de las personas discapacitadas en materia de educación. Ello va más allá de la agrupación de todos los alumnos en un aula para garantizar un apoyo individualizado efectivo que optimice el desarrollo académico y social.

La Convención y el desarrollo social

37. Un aspecto distintivo de la Convención es su dimensión de desarrollo social. Cuando la Asamblea General decidió sacar adelante una nueva Convención sobre los derechos humanos y la discapacidad, decidió, en su resolución 56/168, establecer un comité especial "para que examin[as]e propuestas relativas a una convención internacional amplia e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, sobre la base de un enfoque holístico de la labor realizada en las esferas del desarrollo social, los derechos humanos y la no discriminación...". Por tanto, en la Convención se hace referencia al desarrollo social en el contexto de la promoción y protección de los derechos de las personas discapacitadas en el preámbulo y en diversas disposiciones. Por ejemplo, en el párrafo t) del preámbulo se destaca el hecho de que la mayoría de las personas con discapacidad viven en condiciones de pobreza y se

reconoce la necesidad fundamental de mitigar los efectos negativos de la pobreza en las personas con discapacidad. También hay muchos artículos que se refieren al desarrollo social⁶.

38. La relación entre el desarrollo social, los derechos humanos y la no discriminación se establece de diversas maneras a lo largo de la Convención. El presente informe se centrará en tres de ellas.

39. En primer lugar, como ocurrió con tratados de derechos humanos anteriores, aunque con mayor detalle, la Convención proporciona orientación sobre los pasos y medidas que los Estados Partes tienen que adoptar para garantizar el disfrute de los derechos de las personas discapacitadas. En algunos casos, esos pasos y medidas se contemplan en artículos concretos como: la toma de conciencia (art. 8); la accesibilidad (art. 9); el acceso a la justicia (art. 13); la movilidad personal (art. 20); la habilitación y rehabilitación (art. 26); la recopilación de datos y estadísticas (art. 31); la cooperación internacional (art. 32). El disfrute de los derechos específicos reconocidos en la Convención depende en gran medida de que los Estados Partes cumplan sus obligaciones en relación con estos aspectos del desarrollo. Así, por ejemplo, el derecho de las personas discapacitadas al trabajo requiere un lugar de trabajo accesible, la igualdad de protección ante la ley de las personas discapacitadas depende del acceso a la justicia, y la recopilación y análisis de estadísticas y datos será un elemento crucial de la vigilancia nacional e internacional efectiva.

40. En segundo lugar, la Convención trata de cambiar el modo en que se emprende el desarrollo en la esfera de la discapacidad. Los Estados y otros agentes del desarrollo no sólo deben adoptar medidas para iniciar programas de desarrollo pertinentes para la discapacidad, sino que esas medidas también deben respetar un proceso basado en los principios y obligaciones de derechos humanos establecidos en virtud de la Convención y la normativa de derechos humanos en general. Por consiguiente, al tomar medidas de desarrollo social, el Estado debe garantizar, en la mayor medida posible, la participación de los discapacitados y de las organizaciones que los representan en la adopción de decisiones, en particular mediante la consulta. Del mismo modo, los programas de desarrollo no deben ser discriminatorios y deben promover la igualdad entre el hombre y la mujer. Asimismo, los programas de desarrollo deben estar sujetos a vigilancia y evaluación, incluso con los mecanismos establecidos en la Convención, de manera que las personas discapacitadas puedan recurrir al arbitraje en los casos en que un programa de desarrollo corra el riesgo de violar un derecho reconocido en la Convención. Por último, es importante señalar que en la Convención se trata de incorporar los derechos humanos y la discapacidad en la programación del desarrollo existente. Por ejemplo,

⁶ Other articles also refer to development, for example: States have to undertake or promote research and development of universally designed goods and services (art. 4), ensure the full development, advancement and empowerment of women (art. 6), promote the development of accessible information and communications technologies (art. 9), ensure effective individualized support measures are provided in environments that maximize academic and social development and enable persons with disabilities to learn life and social development skills to facilitate participation in the community (art. 24), promote the development of initial and continuing training for professionals and staff working in habilitation and rehabilitation services (art. 26), and promote opportunities for entrepreneurship and the development of cooperatives in the sphere of work (art. 27).

en el párrafo g) del preámbulo se reconoce la importancia de incorporar las cuestiones relativas a la discapacidad como parte integrante de las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible. Así, mientras la introducción de una programación del desarrollo basado en derechos específicos en relación con la discapacidad será importante para promover la aplicación de la Convención, también será fundamental para empezar a incorporar los derechos humanos y la discapacidad en una programación del desarrollo más amplia que, antiguamente, a veces ha tenido tendencia a descuidar la discapacidad.

41. En tercer lugar, la Convención reconoce la importancia de la cooperación internacional y su promoción para apoyar los esfuerzos nacionales de aplicación de la Convención. En la Convención se promueven medidas de cooperación internacional como la inclusión de los discapacitados en los programas internacionales de desarrollo; el apoyo de la creación de capacidad y del intercambio de información; la facilitación de la investigación y del acceso a los conocimientos, y la prestación de asistencia técnica y económica. En la Convención se establecen una Conferencia de los Estados Partes y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es importante señalar que en el artículo 32 sobre la cooperación internacional, se promueve que los programas internacionales de desarrollo sean "inclusiv[os] y accesible[s] para las personas con discapacidad". De este modo, por ejemplo, un programa de desarrollo que no esté específicamente relacionado con las personas discapacitadas (la construcción de una escuela, la mejora del transporte público, la mejora de los servicios sanitarios) también debe tener en cuenta en su diseño y ejecución los derechos de los discapacitados de manera que los resultados del programa de desarrollo sean asequibles para los discapacitados.

Algunas cuestiones transversales

42. También es importante destacar algunas de las cuestiones transversales pertinentes para el disfrute de los derechos de las personas discapacitadas con arreglo a la Convención.

43. Las mujeres discapacitadas: en la Convención se reconoce el hecho de que las mujeres discapacitadas a menudo hacen frente a múltiples formas de discriminación y se les dedica un artículo específico con el epígrafe "Mujeres con discapacidad" (art. 6). En este artículo se reconoce que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y se exige a los Estados Partes que adopt[e]n medidas para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de [sus] derechos. Este reconocimiento también aparece en el párrafo q) del preámbulo, en que se reconoce que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación. Con este fin, en el párrafo s) del preámbulo se insiste en la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el goce de los derechos humanos por las personas con discapacidad.

44. Los niños y niñas con discapacidad: de manera similar, en la Convención se reconoce la posición especialmente vulnerable en que se encuentran a menudo los niños discapacitados. Por tanto, en la Convención se exige a los Estados que adopten todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos sus derechos en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. En esta referencia se recuerda la única otra referencia expresa a "discapacidad" en cualquiera de los instrumentos

básicos de derechos humanos, que aparece en la Convención sobre los Derechos del Niño. En esta Convención se reconoce que "los impedimentos físicos" son una categoría de discriminación (art. 2) y que los niños discapacitados deben disfrutar de una vida plena y decente (art. 23). Por tanto, la presente Convención se basa en la Convención sobre los Derechos del Niño a través de la identificación de las obligaciones amplias de los Estados de proteger los derechos de los niños discapacitados.

45. Las responsabilidades del sector privado: aunque las obligaciones en virtud de la Convención corresponden a los futuros Estados Partes, el sector privado tiene un importante papel que desempeñar en la lucha contra la discriminación y en el ofrecimiento de oportunidades a las personas discapacitadas para que participen activamente en la vida pública. En este sentido, se reconoce expresamente el papel del sector privado en diversos puntos de la Convención. Cabe señalar que los Estados Partes tienen la obligación de tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad (art. 4). Además, los Estados Partes deberán asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad (art. 9). Al proteger la libertad de expresión de las personas discapacitadas, los Estados Partes tienen que alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso (art. 21). Los Estados también deben concienciar sobre los derechos humanos de las personas discapacitadas a través de la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado (art. 25). Por último, los Estados Partes salvaguardarán el derecho al trabajo, especialmente mediante la promoción del empleo de personas con discapacidad en el sector privado con políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa (art. 27).

46. Además de las cuestiones a que se hace referencia explícita en sus disposiciones, la Convención tendrá particular relevancia para cuestiones o grupos específicos en que se hace frente a situaciones especialmente difíciles en materia de derechos humanos. Por ejemplo, es posible que la Convención sea de particular importancia cuando se aborden los derechos de las víctimas de las minas terrestres. La discapacidad puede ser resultado de un conflicto, especialmente debido a los artefactos sin explotar. La Convención exige a los Estados Partes que adopten todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado y emergencias humanitarias. Asimismo, toda una gama de disposiciones de la Convención es importante para la asistencia a las víctimas de conflictos que a consecuencia de ellos están discapacitadas. Por ejemplo, aunque no se menciona explícitamente a las víctimas de las minas terrestres, la promoción de una asistencia sanitaria de emergencia y continuada, la prestación de servicios de habilitación y rehabilitación, la reintegración económica a través del derecho al trabajo y la exigencia de introducir marcos legislativos y de política para luchar contra la discriminación por motivos de discapacidad tienen toda la pertinencia para la asistencia a las víctimas de las minas terrestres. De este modo, puede considerarse que la Convención complementa otros instrumentos internacionales como la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (Convención de Ottawa sobre minas terrestres), que en su artículo 6 promueve la asistencia a las víctimas.

Mecanismos de vigilancia a nivel nacional

47. En la Convención se exige a los Estados Partes que establezcan mecanismos de vigilancia a nivel nacional e internacional. En este sentido, la Convención prosigue una reciente tendencia en la normativa de derechos humanos que exige a los Estados Partes en los instrumentos de derechos humanos que establezcan mecanismos nacionales de vigilancia⁷.

48. En primer lugar, la Convención, en el artículo 33, exige a los Estados Partes que design[e]n uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la Convención. En segundo lugar, los Estados Partes deben considerar detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles. Dado el carácter amplio de los derechos y obligaciones establecidos en la Convención, los organismos encargados y los mecanismos de coordinación gubernamentales serán importantes para garantizar una reforma amplia y coordinada y estrategias coherentes que pasen por distintos ministerios y distintos niveles del gobierno: central, provincial y local.

49. El tercer mecanismo nacional que prevé la Convención se refiere al establecimiento, designación y/o fortalecimiento de un mecanismo de vigilancia independiente que tenga en cuenta los Principios de París⁸. Según los términos de la Convención, un Estado Parte tiene la opción de asignar la vigilancia nacional a una institución de derechos humanos ya existente o de establecer una nueva institución. Esto refleja el hecho de que un número considerable de Estados ya tienen instituciones independientes de derechos humanos, muchas de las cuales tienen un mandato en relación con la promoción y protección de los derechos de los discapacitados. Lo significativo es que la Convención exige a los Estados Partes que garanticen que una institución nacional independiente tendrá autoridad para vigilar la aplicación de la Convención.

Mecanismos de vigilancia a nivel internacional

50. Como ocurre con otros instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas, la Convención establece una Conferencia de los Estados Partes y un órgano de vigilancia independiente conocido como el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Conferencia de los Estados Partes se reunirá periódicamente, al menos cada dos años, para examinar cualquier tema relativo a la aplicación de la Convención. El Comité, que se establecerá cuando la Convención entre en vigor, constará de 12 expertos independientes, que se convertirán en 18 cuando la Convención obtenga otras 60 ratificaciones o adhesiones. Los Estados Partes elegirán a los expertos mediante voto secreto por un período de cuatro años, que podrá renovarse una vez. Al elegir los miembros, los Estados Partes tienen que tener debidamente en consideración la distribución geográfica, la representación de las diferentes formas de civilización y los principales ordenamientos jurídicos, una representación de género equilibrada y la participación de expertos con discapacidad. Los miembros del Comité

⁷ See for example the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

⁸ Principles relating to the status and functioning of national institutions for protection and promotion of human rights, General Assembly resolution 48/134.

desempeñarán sus funciones a título personal y serán personas de gran integridad moral y reconocida competencia y experiencia en la esfera de los derechos humanos y la discapacidad.

51. La función principal del Comité consistirá en examinar los informes de los Estados Partes sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la Convención y sobre los progresos realizados al respecto. Los Estados Partes habrán de presentar el primer informe general en el plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigor de la Convención en el Estado Parte de que se trate y posteriormente al menos cada cuatro años y en las demás ocasiones en que el Comité se lo solicite. No será necesario que los informes ulteriores repitan la información ya proporcionada en el primer informe. Se invita a los Estados a estudiar la posibilidad de preparar los informes mediante un proceso abierto y transparente y teniendo debidamente en cuenta la posibilidad de una consulta estrecha con las personas discapacitadas y las organizaciones que las representan. El Comité examinará los informes y formulará sugerencias y recomendaciones generales si le parece conveniente.

52. En el Protocolo Facultativo de la Convención se establecen dos procedimientos adicionales: un procedimiento de presentación de comunicaciones individuales y un procedimiento de investigación. Con arreglo al procedimiento de presentación de comunicaciones individuales, todo Estado Parte en el Protocolo reconoce la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas sujetos a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de las disposiciones de la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de personas. El Comité debe evaluar si la comunicación es admisible, y también si el solicitante ha agotado los recursos internos antes de examinar el fondo de la comunicación. Tras el examen de la admisibilidad y del fondo de la comunicación, el Comité podrá transmitir sus sugerencias y recomendaciones al Estado Parte y al solicitante.

53. El Protocolo establece un segundo procedimiento facultativo por el que el Comité puede, si ha recibido información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado Parte de los derechos recogidos en la Convención, invitar a ese Estado Parte a colaborar en el examen de la información. Sobre la base de este examen, el Comité puede designar a uno o más de sus miembros para que realice una investigación e informe urgentemente al Comité. En caso de que el Estado Parte lo autorice y esté justificado, esta investigación puede incluir una visita al país interesado.

54. Por último, la Convención exige al Comité que informe cada dos años a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social sobre sus actividades. En los informes, el Comité podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en los informes y datos recibidos de los Estados Partes.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

55. En el presente año se ha producido un hecho muy significativo para los derechos humanos y la discapacidad, la aprobación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. La Oficina, junto con los Estados, las entidades que colaboran con las Naciones Unidas, las instituciones nacionales de derechos humanos y las

organizaciones de la sociedad civil, ha seguido incrementando su capacidad y sus actividades sobre los derechos humanos y la discapacidad, y tiene la intención de mantener y fortalecer esta tendencia en los próximos años. En este sentido, la Alta Comisionada subraya la importancia de la cuestión de los derechos humanos y la discapacidad para el Consejo de Derechos Humanos y recomienda al Consejo que dedique una atención prioritaria y detenida a la cuestión en su futuro programa de trabajo. Con este fin, la Alta Comisionada destaca la necesidad de realizar un análisis temático detenido de las diversas cuestiones relativas al disfrute de los derechos de las personas con discapacidad y recomienda al Consejo que se plantee la posibilidad de pedir al Alto Comisionado que presente anualmente informes temáticos analíticos sobre los derechos humanos y la discapacidad.
